

Cesión de datos de salud para la obtención de ayudas sociales. Informe 0042/2005

La consulta plantea la conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, de la inclusión en las actas de las sesiones de la Comisión de Ayudas Sociales a Afectados por VIH de los datos referidos a los solicitantes de las ayudas previstas en el Real Decreto-Ley 9/1993, de 28 de mayo, así como su posterior comunicación a los órganos competentes de los Ministerios de Economía y Hacienda y Sanidad y Consumo.

Del contenido del acta que se adjunta a la consulta se desprende que en dicha acta se incluyen datos relacionados con la salud de los solicitantes de las ayudas, al hacerse constar en las mismas su condición de portadores del virus de inmunodeficiencia humana (VIH).

Teniendo esta circunstancia en cuenta, al artículo 7.3 de la Ley Orgánica 15/1999 dispone que “Los datos de carácter personal que hagan referencia (...) a la salud (...) sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando, por razones de interés general, así lo disponga una Ley o el afectado consienta expresamente”.

En consecuencia, al no acreditarse en la consulta la concurrencia del consentimiento de los solicitantes de las ayudas, será preciso analizar si existe una norma con rango de Ley que habilite el tratamiento y comunicación de los datos de salud recogidos en las actas.

El Real Decreto-Ley 9/1993 dispone en su artículo 6.1 que “El reconocimiento de las ayudas corresponderá al Ministerio de Sanidad y Consumo, previo informe favorable de una comisión, cuya composición se establecerá por Orden del Ministro a efectos de verificar la concurrencia en los solicitantes de las circunstancias exigidas”.

Por su parte, el artículo 7.1 dispone que “El pago de las ayudas establecidas en el presente Real Decreto-ley corresponderá:

- a) Al Ministerio de Sanidad y Consumo, respecto de las referidas en el párrafo a) del apartado 1 del artículo 2, y
- b) Al Ministerio de Economía y Hacienda, para las mencionadas en los párrafos b), c) y d) del apartado 1 del citado artículo 2”.

En consecuencia, la Comisión se constituye en el Real Decreto-Ley como órgano consultivo del Ministro de Sanidad, cuya función consiste, precisamente en proponer a aquél la concesión o denegación de las ayudas tramitadas conforme al mencionado Real Decreto-Ley.

Según dispone la Orden del Ministerio de la Presidencia de 17 de mayo de 2001, por la que se establece la composición y el régimen de funcionamiento de la Comisión, en su apartado quinto, “La Comisión

desarrollará las funciones a que se refiere el artículo 6.1 del Real Decreto-ley 9/1993, de 28 de mayo, y su funcionamiento, así como la tramitación de las solicitudes de ayudas sociales, se ajustarán a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”.

En consecuencia, son de aplicación a la Comisión las normas previstas en la Ley 30/1992 en cuanto al funcionamiento de los órganos colegiados. A tal efecto, prevé el artículo 27.1 de la citada Ley que “De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el Secretario, que especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados”.

Pues bien, teniendo en cuenta que el Real Decreto-Ley 9/1993 atribuye a la Comisión la formulación del informe preceptivo sobre la procedencia del reconocimiento de las ayudas previstas en el propio texto y que la Ley 30/1992 impone la obligación de hacer constar en el acta del órgano colegiado los acuerdos adoptados, ha de considerarse que la inclusión de los datos referentes a los solicitantes de las ayudas, así como de la procedencia o improcedencia de dicha concesión, se encuentran amparadas por lo dispuesto en el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 15/1999, en conexión con los artículos 6.1 del Real Decreto Ley 9/1993 y 27.1 de la Ley 30/1992, normas con largo de Ley que justifican dicho tratamiento.

En todo caso, es preciso recordar que los datos incluidos en el acta únicamente podrán ser utilizados para las finalidades propias de la actividad de la Comisión, toda vez que el artículo 4.1 de la Ley Orgánica 15/1999 dispone que “Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido”, añadiendo el artículo 4.2 que “Los datos de carácter personal objeto de tratamiento no podrán usarse para finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos”.

Por otra parte, en cuanto a la transmisión de los datos a los órganos competentes del Ministerio de Sanidad y Consumo y del Ministerio de Economía y Hacienda, ya se ha indicado que el reconocimiento de las ayudas corresponderá al Ministro de Sanidad y Consumo (artículo 6.1 del Real Decreto-Ley 9/1993), correspondiendo su pago a los Ministerios de Sanidad y Consumo o Economía y Hacienda, en virtud del supuesto que justifica el reconocimiento (artículo 7.1 del mismo texto legal).

En consecuencia, la transmisión de los datos a los órganos competentes de los citados Departamentos se encontraría amparado en el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 15/1999, dado que los citados artículos 6.1 y 7.1 justificarían la transmisión de los datos en todo caso al Ministerio de Sanidad y Consumo y al Ministerio de Economía y Hacienda, en relación con éste último, en los supuestos previstos en el artículo 7.1 b) del Real Decreto-Ley 9/1993

Debe, por último, indicarse que en caso de que los datos contenidos en las actas hubieran sido incorporados a un fichero, será precisa la adopción de la correspondiente disposición de carácter general, en los términos previstos en el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, procediéndose a continuación a la notificación del tratamiento para su inscripción en el Registro General de Protección de Datos. Además, será necesario implantar sobre el fichero las medidas de seguridad exigidas por el Real Decreto 994/1999, correspondiendo en este caso la implantación de las medidas de nivel alto, de conformidad con lo dispuesto en su artículo 4.3.